Clase 1: Introducción a la Administración Financiera del Estado

Los organismos públicos necesitan recursos financieros para operar. Esto es dinero para pagar las remuneraciones de sus empleados, adquirir bienes de uso y consumo, contratar servicios (como telefonía, por ejemplo) y pagar otros (energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, etc.)

Estos recursos se asignan a través del proceso presupuestario. Incluso cuando los organismos recaudan dinero a través de la venta de servicios, como el SRCEI, la obtención y el uso de dichos recursos deben estar autorizados en el presupuesto. Recuerde que este presupuesto es una Ley (o sea manda, prohíbe o permite)

Los organismos deben solicitar su presupuesto a través del proceso de formulación presupuestaria. Una vez asignado, ese presupuesto (conocido como *inicial*) se convierte en el límite máximo a que pueden alcanzar sus egresos (caja) y compromisos (devengados)

El presupuesto, como una estimación financiera de los ingresos y gastos, puede sufrir modificaciones durante el año. En el caso chileno el legislador estableció que el presupuesto es de carácter anual y que además coincidirá con el año calendario (1 de enero al 31 de diciembre)

Como la Ley de Presupuestos rige desde el 1 de enero al 31 de diciembre, a contar del año siguiente no puede efectuarse pago y compromiso alguno sino con cargo al presupuesto vigente. En estricto rigor, el presupuesto anterior se extinguió por el solo ministerio de la ley, y ya no puede invocarse como una autorización para efectuar gastos.

En ese contexto, los saldos presupuestarios (no devengados) y financieros (presupuestos devengados pero no pagados) deben incorporarse al presupuesto vigente, lo que se conoce como la incorporación del saldo inicial.

Un organismo público no puede ejecutar su presupuesto como le plazca. La DIPRES en cuanto órgano encargado de regular y supervisar la ejecución del gasto público, define para todos los organismos un programa de ejecución presupuestaria (en el mes de diciembre) y con ello define programas de caja mensual, donde se definen los niveles y prioridades de los gastos a realizar. Si un organismo recibe Aporte Fiscal Libre desde la Partida 50 Tesoro Público,

podrá solicitar cada mes, fondos para poder solventar sus gastos, lo que se conoce como solicitud de Giro Global. Un organismo no podrá solicitar más recursos que los autorizados en su programa de caja mensual.

Todos los organismos públicos que reciben recursos de Aporte Fiscal Libre tienen aperturada una cuenta corriente bancaria denominada Cuenta Única Fiscal (CUF), en el Banco del Estado. Esta cuenta corriente es **Subsidiaria** (pertenece) a una **Principal** que administra la Tesorería General de la República. Recuerde que todos los ingresos por concepto de Impuestos son recaudados por el Servicio de Tesorerías y pertenecen, presupuestariamente, al FISCO. (Por esta razón, en las clasificaciones presupuestarias el aporte fiscal es, para los organismos públicos que lo reciben, un subtítulo de ingresos, en este caso 09; pero para el Fisco – Tesoro Público es un gasto, subtítulo 27)

La lógica es que si los organismos públicos tienen durante un mes compromisos por 1000 y no tienen otra fuente de ingreso que no sea el Aporte Fiscal, deberán solicitar al Fisco un aporte fiscal libre de 1000. Si este monto está autorizado en el programa de caja mensual, la Tesorería transferirá desde la Cuenta Única Fiscal Principal a la Subsidiaria del organismo, la suma de 1000. Si al momento de la transferencia el saldo en cuenta corriente del organismo era 0, a contar de ese momento será 1000. Una vez efectuados sus egresos o pagos, el saldo en cuenta corriente debería nuevamente ser 0. Los organismos públicos no tienen en sus cuentas corrientes una “línea de crédito”, por lo que no pueden sobregirarse.

Los conceptos del proceso presupuestario están estandarizados (clasificaciones presupuestarias), por los que todos los organismos entienden lo mismo al hablar de gastos en personal, bienes y servicios de consumo, ingresos de operación, etc.

Cada uno de estos procesos, tanto presupuestarios como financieros, deben ser contabilizados por los organismos públicos. Para ello existe un conjunto de normas y principios que regulan este proceso. Los conceptos contables a utilizar por el gobierno central están especificados en un Plan de Cuentas que es de uso obligatorio. Asimismo, están definidos procedimientos contables para reflejar los hechos económicos que realizan los organismos públicos sean estos de origen presupuestario o de otra naturaleza.

La lógica antes descrita hace que la administración financiera del Estado tenga tres procesos fundamentales: presupuestarios, de administración de fondos y de contabilidad.